

cuya devolucion ha reclamado el quejoso, fué expedida y ejecutada con las facultades concedidas por la ley de 11 de Diciembre de 1861, y posteriores relativas, por las cuales se suspendió la garantía de la propiedad, y se facultó al ejecutivo de la Union competentemente.

Segundo. Que la ley de amnistía de 14 de Octubre de 1870, en su artículo 8º dispone que se devuelvan á los amnistiados sus bienes confiscados, siempre que no estuvieren enagenados, al aplicarles la gracia concedida; y que la casa en cuestion, segun las constancias de autos, está enagenada desde el año de 1867, pues desde entonces el Gobierno General la cedió al del Estado de Aguascalientes, para dotar la instruccion pública.

Tercero. Que el punto sobre si la instruccion pública de Aguascalientes debe ó no conservar la propiedad de la casa cedida, no pertenece á este juicio, y

Cuarto. Que en consecuencia de lo expuesto, no existe la violacion de garantías que alega el quejoso, única causa de que procede el amparo con arreglo á la Constitucion federal que lo establece. Por tales fundamentos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Aguascalientes pronunciada en 22 de Junio próximo pasado, por la que declara que: La Justicia federal no ampara ni protege á D. Andrés Avila, respecto de la confiscacion que se le hizo legalmente de la casa que fué de su pertenencia, ubicada en esta ciudad, calle de la Hospitalidad núm. 1.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Me-

xicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, sobre varios efectos de ropa aprehendidos á D. Juan Fernandez, en la casa de D. Isidoro Guerra, vecino de la Villa de Marin.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

En once del mismo devolvió el Promotor fiscal estos autos, con la siguiente exposicion: que se ha impuesto de las anteriores diligencias practicadas en este juicio, sobre comiso de varios efectos de ropa extranjera, que, por denuncia hecha á la oficina del Contraresguardo, establecido en esta frontera, fueron extraidos de la casa de D. Isidoro Guerra vecino de la Villa de Marin, cuyo individuo manifestó en el acto de la aprehension, eran dichos efectos de D. Juan Fernandez, quien los habia traído de Matamoras, conduciéndolos en un caballo, habiéndolos antes sacado de unos carretones que pasaron por la arena, y metiéndolos á su casa en la referida Villa, de noche, cuyos efectos estaban ocultos debajo de una cama, y el dueño de ellos ausente en Matamoras, para donde dijo el mismo Sr. Guerra, se habia devuelto despues de dejar allí aquellos efectos; que así mismo se ha impuesto de las excepciones alegadas por dicho Sr. Fernandez, pretendiendo este dar como procedencia de sus efectos, esta Ciudad y la de Cadereita Ji-

menez, en cuyos lugares, dice, ha comprado los repetidos efectos; presentando con este fin una informacion de testigos, y unas facturas de compra hechas, tanto en esta Ciudad como en la de Cadereita, siendo, ó apareciendo como vendedores aquí, la casa de comercio de los señores "Jacobo Ramos y hermano," y en la de Cadereita, unos señores D. Rómulo Rodríguez y D. Francisco Guerra: que segun el juicio que se ha podido formar, el Fiscal, comparando los antecedentes que hubo para la aprehension de esos efectos, el lugar donde se encontraron, lo que se dijo en el acto por el mismo dueño de la casa en que estaban ocultos, con las excepciones alegadas tan inverosímiles como vagas, porque aun suponiendo real y efectivamente ciertas esas compras, lo que hasta ahora no se ha probado con la presentacion de libros de las casas que se dice vendedoras, siempre se tendria la dificultad que nace de la duda existente sobre la identidad de los efectos aprehendidos con los comprados, pudiendo muy bien en el caso, ser distintos unos y otros, pues que no hay anotacion alguna en las facturas de compra, presentadas por el interesado, que demuestre fueron despachadas por la oficina del Contrabando para ir al lugar del destino que en ellas se pretende; resulta de este exámen comparativo, muy dudosa la procedencia que se quiere dar á esos efectos como comprados aquí y en Cadereita Jimenez para llevarlos á vender á la Villa de Marin, y por el contrario, muy clara y verosímil la procedencia ilegítima ó ilegal de esos efectos como traídos de Matamoras ó de algun otro lugar de la zona libre, sin pagar los respectivos derechos á la Hacienda pública, robusteciéndose ese concepto con lo que dijo el dueño de la casa en donde se encontraron dichos efectos, de que estos se habian traído de Matamoras, para cuyo lugar se habia vuelto el dueño de ellos, D. Juan Fernandez: que si á todo esto se agrega la consideracion de que es no solo inverosímil, sino hasta contrario á los mis-

mos intereses del comerciante, llevar efectos de ropa de esta ciudad ó la de Cadereita para la Villa de Marin, porque indudablemente puestos aquí los efectos importan mas que en la referida Villa, en donde por otra parte, no puede haber el consumo que aquí por la falta de poblacion; se convencerá cualesquiera, que la procedencia de esos efectos, no es la que se ha pretendido dar por el interesado; sino la que resulta de todos los antecedentes enumerados, á los que hay que añadir, que el señor Fernandez es pacotillero, y ningunas ventajas le produciria esta industria, tomando aquí ó en Cadereita efectos para revenderlos en Marin: que por todos estos antecedentes, que hacen aparecer ante la ley á los efectos aprehendidos en Marin como internados hasta allí de algun puerto de la zona libre sin pagar los derechos correspondientes á la Hacienda pública, bien merecen dichos efectos que se les aplique la pena de comiso determinada por la ley para los efectos que se conducen de contrabando, por mas que ella sea grave, como se dice, pues no es de la responsabilidad de la ley sino de sus infractores el que se aplique dicha pena, y por mas que para librarse de esa pena el infractor recurra á consideraciones inadmisibles, como sin duda son la de que los efectos aprehendidos forman toda su fortuna adquirida á costa de trabajos largos y sacrificios, porque como se ha dicho, no es de la responsabilidad de la ley, ni de la autoridad que la aplica, ni de los empleados que piden esa aplicacion, el que se imponga esa pena á efectos que han sido introducidos de contrabando sin pagar á la Hacienda pública los derechos señalados; pudiendo decirse, por el contrario, que todas esas consideraciones debieron hacer al señor Fernandez mas prudente, mas cauto y previsor, para impedir de una manera legal, es decir, pagando los derechos, el que sus efectos tuvieran el resultado que se les espera por su fraudulenta introduccion: que apurando los supuestos y concediendo que los

efectos aprehendidos, tuvieran la procedencia que se pretende, siempre se habría faltado á los requisitos prevenidos por la ley en su conduccion de esta ciudad y de la de Cadereita para la repetida Villa de Marin; requisitos establecidos para impedir, que, á pretexto del libre tráfico interior, se cometa el fraude principalmente en los lugares en que es tan fácil cometerlo, como en todos los que están próximos á la zona libre, y no habiéndose sacado el pase ó guía respectivos, se debe aplicar á los efectos aprehendidos bajo tales condiciones la pena establecida por la ley, cuya pena es en el caso, la de comiso, conforme á lo dispuesto en la fraccion 1ª del artículo 15 de la ley de 28 de Diciembre de 1843, que se conoce con el nombre de pauta de comisos, y que está declarada vigente por la última ley sobre establecimiento del Contrarresguardo en esta frontera del Norte: que para concluir manifestará que la excepcion de ignorancia alegada por el señor Fernandez, en nada le favorece, porque dicha ignorancia es de derecho y no de hecho, y porque atento ese oficio ó industria de pacotillero, no es posible ignorara las últimas leyes fiscales dictadas para el comercio, ó introduccion y circulacion de efectos extranjeros; que es cuanto tiene que exponer el Fiscal, en este juicio, pidiendo: que en virtud de las constancias de estos autos y de las disposiciones de las leyes fiscales que acaba de citar, se sirva declarar ese Juzgado de su digno cargo, caidos en la pena de comiso los efectos que por denuncia hecho al Contrarresguardo, fueron aprehendidos en la Villa de Marin en la casa de D. Isidoro Guerra, y cuyos efectos se encontraban ocultos; todo de conformidad con lo prevenido en la fraccion 1ª del artículo 15 de la pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1843.—*Lic. Antonio Maria Elizondo.*—Una rúbrica.

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Monterey, Marzo veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio sobre comiso de varios efectos de ropa aprehendidos á D. Juan Fernandez en la casa de D. Isidoro Guerra vecino de la Villa de Marin, en el cateo que hizo la 1ª autoridad local de la misma Villa por requerimiento del C. Gefe del Contrarresguardo de la frontera del Norte, á quien se denunció que en varias casas de aquel punto se estaban introduciendo efectos de contrabando en partidas parciales para conducirlos despues á esta ciudad: vista el acta que levantó dicha autoridad, de la cual resulta que en el registro que hizo en la casa de Guerra en presencia del teniente del Contrarresguardo coronel D. Francisco Otero y cuatro celadores, se sacaron de debajo de una cama cuatro bultos de ropa con los efectos que en la misma acta se expresan, declarando Guerra en aquel acto, interrogado por la autoridad, que dichos efectos eran de Juan Fernandez que los había traído de Matamoros en unos carretones que pasaron por la hacienda de la Arena, de donde se condujeron á Marin en un caballo metiéndolos en una noche; visto lo que expuso el C. Gefe del Contrarresguardo al abrirse el juicio pidiendo se declaren caidos en la pena de comiso por haberse introducido fraudulentamente sin los documentos legales que debían ampararlos; lo que contestó Fernandez, excepcionando que no eran de contrabando, apoyado en varias facturas de compra que presentó para acreditar que los había adquirido en esta ciudad y en la de Cadereita Jimenez, de las personas que las suscriben, y que de estos puntos y no de Matamoros, habían sido conducidos á Marin, y lo que expuso el C. Promotor fiscal, apoyando la petición del C. Gefe: visto el auto en que se mandó recibir á prueba este negocio, á instancia del demandado; las que éste produjo en esta ciudad y en Cadereita Jimenez, para acre-

ditar sus compras; su alegato de buena prueba, el del C. Gefe; el dictámen del C. Promotor fiscal, y todo lo demas que debió y convino verse.

Considerando: que Fernandez no ha justificado las compras de Cadereita, por la vaguedad con que declararon sus testigos y porque los mas se refieren á él mismo en sus dichos: que si bien ha acreditado la compra hecha en la casa de los señores "Ramos y Hermano," no habiéndose presentado las guías de su introduccion á esta plaza, no está probada su buena procedencia, que aun en el caso de que estos efectos se hubieran introducido legalmente para conducirse á Marin debieron cubrirse con los documentos que previene el art. 1º de la pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1843, y que no consta que Fernandez se proveyera de ellos en esta ciudad, ni en Cadereita Jimenez. Se declara por tales fundamentos: que dichos efectos han caído en la pena de comiso, conforme al art. 1º fracción 1ª de la misma pauta. Notifíquese á las partes esta resolución, y sáquense dos copias certificadas, una que se remitirá al Ministerio de Justicia, y otra á la secretaría de la Suprema Corte en union del dictámen fiscal en cumplimiento de la circular de la misma Corte de 31 de Diciembre último. Yo, el Juez de Distrito de este Estado, así lo resolví, mandé y firmé, actuando con testigos de asistencia. Doy fe.—*Lic. José María Martínez.*—A.—*Carlos Landeros.*—A.—*Abelardo Morelos.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal
del Tribunal de Circuito.*

C. Juez de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que interpuesta apelacion por el C. Juan Fernandez, de la sentencia de 1ª instancia, pronunciada en estos autos con fecha 22 de Marzo último, y por la que se declararon caídos en la pena de comiso los efectos que, denunciados

al Contraresguardo como de contrabando, fueron aprehendidos en la Villa de Marin, y en la casa de D. Isidoro Guerra, por unos guardas del mismo Contraresguardo; y declarada con lugar al calificar el grado por haber los peritos avaluado los efectos en mas de quinientos pesos, se ha sustanciado el juicio en esta 2ª instancia, dándose audiencia por escrito al interesado y al C. Gefe del repetido contraresguardo, quienes, como es natural, han sostenido su intencion, pidiendo el primero, la revocacion de la sentencia apelada, y el segundo, su confirmacion, por ser justa y arreglada á derecho, segun lo que aparece justificado de autos.

El que suscribe, con vista de lo nuevamente alegado en esta instancia, y que en lo general ha sido, con respecto al apelante, lo mismo que alegó en la 1ª para alcanzar una sentencia favorable, sigue opinando, por que se declare el comiso de tales efectos, atendidas las circunstancias en que fueron encontrados, el origen, que desde luego se les dió, y la insuficiencia de las pruebas rendidas, queriéndoles dar otra procedencia, la procedencia legítima. Como ya se ha dicho, siendo en general las razones alegadas hoy por el apelante para que se revoque la sentencia las mismas que hizo valer en la 1ª instancia, y que se declararon insuficientes, no puede ser sino lo mismo tambien lo que ahora se exponga, por el representante de la Hacienda pública en apoyo de sus derechos.

Las principales causas porque se han declarado caídos en la pena de comiso los dichos efectos, son: el haberse aprehendido, estando ocultos, en la casa de un particular, quien dijo desde luego procedian tales efectos de Matamoros, para donde se habia vuelto á marchar el dueño de ellos, D. Juan Fernandez; la de no haberse desvanecido, durante el juicio, las sospechas vehementes nacidas de estos hechos, sobre que tales efectos fueron internados de contrabando, es decir, sin pagar los derechos res-

pectivos; y la de que, tampoco se pudo justificar su procedencia como de esta ciudad y de la Cadereita, por las pruebas testimoniales rendidas con tal fin.

Ahora subsisten tales causas, sin que, en nada se haya desvirtuado ó perdido su valor y fuerza, *comprobando el contrabando*, por lo nuevamente alegado, porque todos los raciocinios están basados, como desde luego se advierte á la simple lectura de la espresion de agravios, en que, siendo comprados esos efectos en esta Ciudad y en la de Cadereita Jimenez, no han podido ser introducidos á Marín de contrabando.

Pero, es el caso, que, ni está justificado de una manera satisfactoria y completa la procedencia de tales efectos, pues que hasta ahora, no se ha presentado asiento alguno de la factura respectiva en los libros de los que aparecen vendedores, cuya circunstancia vendría á ser atendible en el caso; ni aun cuando lo estuviera, aun cuando constara de una manera cierta la venta hecha en esta plaza y en la de Cadereita, de los repetidos efectos, no se podría saber si estos, (los aprehendidos) eran los mismos de la compra, porque á su extraccion de esta ciudad, (dado se entiende, que tuvieran esta procedencia,) no se habian acompañado con los pases respectivos; y la falta de este requisito indispensable, daría siempre por resultado, la pérdida de los efectos aprehendidos, como distintos de los que se hubieran comprado para acá.

Mas no hay necesidad de entrar en todas estas consideraciones, para justificar la mala é ilegítima procedencia de los dichos efectos.

Baste para ello la declaracion *expresa y terminante* del dueño de la casa en que fueron encontrados, y lo que esto dice sobre el modo como se metieron á aquella villa, de noche y en un caballo; y la no menos fuerte presuncion que hay para creer, no fueron introducidos los tantas veces dichos efectos de una manera legal, previo el pago de los derechos que causaron,

sacada esa presuncion, de que no es posible creer que con buen éxito ese señor estuviera sacando pequeñas facturas de ropa, para ir á vender á Marín, con igual demanda que los que se llevan allí de todos los lugares de la línea del Bravo, de donde está mas cerca la referida Villa de Marín que esta ciudad y la de Cadereita; razon esta que convence hasta la evidencia, que esta plaza y la de Cadereita, no han podido ser en las que se compraron esos efectos para irlos á vender á Marín.

Por tales consideraciones, pues, y con fundamento en las disposiciones legales que ya tiene citadas en la 3ª instancia, concluye con proponer á ese superior Tribunal, se sirva confirmar en todas sus partes la sentencia de 1ª instancia que declaró caídos en la pena de comiso los efectos aprehendidos á D. Juan Fernandez en la casa de D. Isidoro Guerra.

Monterey, 27 de Abril de 1871.— *Lic. Antonio María Elizondo.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Monterey, á veintitres de Mayo de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos, y considerando que es un hecho constante en autos que los efectos sobre que ha versado el presente juicio se encontraron ocultos en Marín y casa de D. Isidoro Guerra, quien en el acto del cateo manifestó á los agentes del contrarresguardo y á la autoridad que los acompañó, que dichos efectos pertenecian al C. Juan Fernandez y que eran procedentes del Puerto de Matamoros, á donde éste se había vuelto despues de dejar depositados los referidos efectos: que no pudo lograrse la comparecencia de Fernandez sino hasta el 9 de Febrero, un mes y dias despues de verificada la aprehension de los repetidos efectos: que aunque éste en el juicio ha sostenido y procurado probar que los efectos de que se trata no son procedentes del Puerto sino de

esta Ciudad y la de Caderecita Jimenez, la prueba que sobre el particular adujo no llena su objeto, como lo demuestra muy bien el C. Juez de primera instancia en la sentencia apelada, con apoyo de las constancias de autos; y por último, que la referida sentencia de 22 de Marzo del corriente año, en que el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon declaró caídos en la pena de comiso los cuatro bultos de ropa aprehendidos en la casa de Guerra, y que contienen el primero sesenta piezas algodón de doce paños cada una, diez pañuelos sueltos, cuatro piezas imperial con ciento sesenta yardas, catorce y media docenas delantales, cuatro docenas paños algodón; el segundo trece piezas y tres retazos de indiana con trescientas cincuenta y seis yardas, diez piezas y un retazo indiana con doscientos ochenta y tres metros; el tercero, ochenta y cinco docenas de pañuelos de algodón, y el último ochenta y cuatro docenas del mismo efecto, está arreglado á las constancias de autos y á las disposiciones legales relativas; el C. Magistrado dijo: que de conformidad con el dictámen del C. Promotor fiscal, debia confirmar y confirmó en todas sus partes por sus propios legales fundamentos la mencionada sentencia, disponiendo se libre copia de esta resolusion al C. Gefe del Contrarresguardo, á fin de que procediendo á hacerse la distribucion respectiva de los efectos decomisados, mande testimonio del documento que la contenga para que, agregado á los autos, se remitan estos á la Suprema Corte conforme á lo dispuesto en el art. 47 de la pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1843. Notifiquese. El C. Lic. Rafael Treviño y Garza, Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, así lo resolvió, mandó y firmó por ante mí: doy fé.—firmado.—*Rafael Treviño y Garza.*—*T. Crescencio Pacheco*, secretario.

Pedimento del C. Procurador General de la Nacion.

El Procurador General de la nacion dice: que en la Villa de Marin (Estado de Nuevo Leon) y en casa de D. Isidoro Guerra, fueron aprehendidos cuatro bultos de efectos extranjeros, de que resultó dueño D. Juan Fernandez. Sustanciado el juicio de comiso, en el que se recibieron las pruebas y oyeron los alegatos del interesado y de los agentes del fisco, el Juzgado de Distrito del Estado falló en definitiva, declarando que los mencionados efectos habian caido en la pena de comiso.

Fernandez apeló de ese fallo; y justificado que el valor de los efectos excedía de quinientos pesos, se le admitió el recurso, y los autos fueron remitidos al Tribunal de Circuito de Monterey. Este, oída la expresion de agravios y lo que tuvieron á bien alegar el Promotor fiscal y el gefe del contrarresguardo de la frontera del Norte, confirmó en todas sus partes la sentencia de 1ª instancia, y mandó se procediese á la distribucion del comiso en los términos que prescribe la ley. Así se verificó, segun lo comprueban las constancias originales que el Tribunal de Circuito cuidó de agregar al proceso.

La sentencia de 2ª instancia ha causado, pues, ejecutoria, y está ejecutada. En los procedimientos ha habido regularidad y exacta observancia de las leyes; y por lo mismo el Procurador general pide se dé por revisado el proceso.

México, Julio doce de mil ochocientos setenta y uno.—*S. Guzman.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México Julio catorce de mil ochocientos setenta y uno

Por revisado, y no apareciendo mérito

para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívense á su vez el Toca, —*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M^a Aguilar*, secretario.

Son copias México Julio diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial 2º y archivero.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por Francisco Luquin y Antonio Perez, contra el gobierno del Estado que los tiene presos en esta ciudad cumpliendo la condena á que fueron sentenciados por el delito de rebelion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En cinco de Abril próximo pasado, se presentaron ante vd. los reos Francisco Luquin y Antonio Perez, esponiendo que: habia tiempo se encontraban presos en la carcel de esta ciudad por haber andado con los rebeldes en la revolucion próxima pasada, no habiendoseles puesto en libertad sin embargo de lo prevenido en la ley de amnistia, por lo que pedian amparo de garantías contra el gobierno del Estado.

Recibido de este el informe justificado, el Promotor observa:

Primero: que no es cierto la relacion de los hechos que hacen los quejosos, pues aparece del expresado informe, que estos fueron juzgados por el delito de plagio y sentenciados con arreglo á la ley de la materia de 9 de Abril del año próximo pasado.

Segundo: que habiendo sido condenados á la última pena, fueron indultados por la Legislatura del Estado, conmutándoseles aquella en la de dos años de presidio.

Tercero: que no aparece violacion alguna de garantías por parte del ejecutivo; y

finalmente, que el escrito de los interesados no viene en la forma prescrita por el art. 4º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Por todas estas razones, y con fundamento de los artículos 1º 2º 4º y 8º de la citada ley, el Promotor pide, se sirva declarar que la justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos, sin condenarlos en la multa de la ley por su notoria insolvenia.

Morelia, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.—*N. Caballero*, una rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Junio veinte y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por los presos Francisco Luquin y Antonio Perez, quejándose del gobierno del Estado que los tiene en prision en esta Ciudad, extinguiendo la condena á que fueron sentenciados por el delito de rebelion; el informe justificado del C. Gobernador, y lo expuesto por el C. Promotor; la citacion para sentencia y cuando mas consta de autos y

Considerando: que la queja de los reos es infundada, por cuanto se apoya en que fueron condenados definitivamente por el delito de *rebelion*, cuyo hecho no es cierto, pues el documento de fojas 4 y el informe á que sirve de justificante, prueban que los quejosos están extinguiendo la pena de presidio en que se les conmutó la de muerte á que fueron condenados por el delito de robo con asalto, por el C. Prefecto de Patzcuaro: Que la ley de amnistia á que se acogen los reos, fué solo dictada para el de rebelion y que los reos acusados de aquel, no gozan las garantías otorgadas al hombre por el Código fundamental; como pide el Promotor, y con fundamento del artículo 101 de la Constitucion general y de los 1º,